



La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempo de paz que está aplicando Donald Trump a migrantes ilegales y a estudiantes universitarios con sus papeles en regla es una aberración. Es una Ley vigente desde 1798 que se estableció para expulsar sin demoras legales a extranjeros nativos de una nación que ha sido declarada hostil al gobierno de Estados Unidos.

Esta ley no discrimina entre residentes legales y migrantes ilegales. Las autoridades migratorias la están aplicando para expulsar de territorio norteamericano a migrantes ilegales como aquellos extranjeros que tienen la documentación reglamentaria y ejercen los derechos que le corresponden como residentes, como es el caso de los estudiantes de grado, postgrado y doctorado de las universidades por participar en manifestaciones o apoyar la causa Palestina el año pasado.

Hoy Estados Unidos ya no el país multicultural del sueño americano como algunos creían, sino que es una pesadilla norteamericana. Los migrantes ilegales de cualquier nacionalidad están siendo objeto de persecuciones, expulsiones y humillaciones al peor estilo nazi fascista, incluyendo en ese ámbito, el atroz destino que acordaron Rubio y Bukele para los migrantes que ellos suponen, creen, o quieren creer, que pertenecen al Tren de Juan Guaidó: las prisiones de El Salvador.

Las deportaciones son un escándalo en el mundo. En Estados Unidos hay mucha preocupación por los pasos autoritarios del gobierno republicano, al punto que se está hablando de crisis constitucional.

En entrevista con Cris Hedges, la exprofesora de Derecho de la Universidad de Columbia, Khaterine Franke a quien su apoyo a las protestas propalestinas le costó "un despido disfrazado de términos más aceptables", alertó: "Están usando las leyes de inmigración para perseguir a manifestantes o personas que expresan opiniones críticas con la administración Trump y que no son ciudadanos estadounidenses. Ahora nos atacarán a nosotros, los ciudadanos estadounidenses, con la ley."

I/ Edgar Vargas

Suplemento Dominical del

CORREO DEL **ORINOCO**

Domingo 23 de marzo de 2025 • Nº 700 • Año 10 • Caracas

Las universidades son el enemigo



Protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia (Nueva York, EEUU) en solidaridad con el pueblo palestino en abril de 2024. / Foto Abbad Diraneyya

tituto Nacional de Salud gasta 35.000 millones de dólares anuales– sino que también sostienen el sistema de educación superior con 135.000 millones en becas y préstamos para estudiantes de grado y posgrado).

Este contexto de competencia feroz y precariedad financiera explica la falta de solidaridad y de acción colectiva, pero también explica que muchas de las decisiones en los campus de Estados Unidos se tomen, o dejen de tomar, en función de la “marca” de la universidad. Y dado que lo que venden las universidades no es, en primera instancia, una educación per se sino un capital cultural –una promesa de avance social, la realización de las aspiraciones, el acceso a una red de exalumnos– lo que importa más que nada es proyectar prestigio, éxito y excelencia. Un solo escándalo puede arruinarlo todo. La cobertura mediática de las protestas propalestinas, por no hablar del testimonio ante el Congreso de tres rectoras de prestigiosas universidades privadas (ninguna de las cuales sobrevivió en el cargo), solo han servido para reforzar la cautela. En otras palabras, si Trump es el típico bully de patio de instituto y Vance el amigo que le arenga sin meterse en la pelea, las universidades no solo son el chaval físicamente endeble que se deja abusar, sino que además tienen miedo de mancharse la ropa.

La ironía del caso es que esta indefensión es, en gran parte, autoinfligida. Los cimientos sobre los que podría y debería levantarse una defensa militante de la universidad –la libertad de cátedra del profesorado, la libertad de expresión del alumnado, la seguridad laboral del personal docente– los han venido debilitando, de forma sistemática, las propias administraciones universitarias. A fin de cuentas, en el marco de su lógica neoliberal, burocrática y mercadotécnica, la misión principal de la educación superior –investigar, cuestionar, aprender, argumentar, disentir– es, en el mejor de los casos, un atributo decoroso (en la medida en que puede generar prestigio) y, en el peor, un obstáculo engorroso, un factor poco racional, eficaz o predecible que es necesario controlar y minimizar. Los ataques de Vance, Trump y compañía son agresivos y destructivos, sí, pero en realidad participan de la misma lógica que ha movido a los administradores de las universidades desde hace muchos años.

Es la misma lógica, por ejemplo, la que permitió que muchas universidades restringieran las libertades de sus estudiantes en torno a las protestas por la guerra de Gaza, asumiendo sin apenas chistar la definición de “antisemitismo” de la derecha y enarbolando la excusa de la “seguridad” de las y los estudiantes judíos –interpretando esta seguridad menos en términos físicos que psicológicos, y haciendo caso omiso de que muchos de los propios manifestantes eran judíos–. Hoy, Trump y Vance en cierto modo lo tienen fácil, porque las propias universidades les dejaron el terreno preparado. Trump va a por las universidades de la misma manera, y con los mismos argumentos, con que las universidades han ido a por sus estudiantes y profesores.

Mientras tanto, la desobediencia, un elemento crucial de la lucha progresista universitaria de los años 60 en adelante, ha dejado de ser una opción. Las administraciones no se atreven a desobedecer al gobierno, por más anticonstitucionales que sean sus acciones, pero tampoco permiten que los estudiantes las desobedezcan a ellas. Ante las protestas propalestinas, muchas administraciones recurrieron a medidas disciplinarias desmesuradas (suspensiones, expulsiones). Fue precisamente la Universidad de Columbia –hoy en la diana del trumpismo– la que decidió llamar a la policía de Nueva York para desalojar un edificio ocupado por un grupo de manifestantes.

Esta fetichización de la obediencia y del castigo puede resultar rara, dado que la mayoría de los profesores y estudiantes se identifican como progresistas y no dudarian en defender los logros conseguidos tras medio siglo de luchas emancipatorias. Para explicar la paradoja, es importante comprender otro elemento esencial de la lógica institucional de las universidades norteamericanas de las últimas décadas: la tendencia a buscar una salida burocrática a tensiones políticas y culturales; instituir nuevas reglas y contratar a administradores para hacer que se cumplan. ¿Se diagnostica un problema endémico de acoso sexual? Entonces se crea una agencia encargada de escribir y vigilar nuevas normas de conducta en las relaciones íntimas. ¿Los estudiantes de cierto grupo se sienten infrarrepresentados? Pues se crea una nueva oficina para promover sus intereses. El problema no es que estas medidas hayan sido ineficaces (a veces logran cambios) sino que han incrementado sin cesar el cometido de las burocracias universitarias, al mismo tiempo que restringen la autonomía de las y los estudiantes y el poder del profesorado en la gobernanza de sus propias instituciones.

A pesar de estos y otros problemas, la educación superior en Estados Unidos no deja de ser una pieza central de su poderío económico y cultural. La prisa y la saña con las que Trump, Vance y Musk han procedido al desmantelamiento de su infraestructura son tan ilógicas como la falta de valentía y solidaridad a la hora de defenderla de parte de la gran mayoría de líderes universitarios, cuya acción, por ahora, se ha limitado al ámbito judicial (son muchos los juicios pendientes) y a la movilización, por debajo del radar, de los ejércitos de lobistas del ramo.

Mientras tanto, entre el profesorado y el estudiantado –que, si no tienen pasaporte norteamericano, son objetos de una intensa vigilancia realizada por empresas privadas y un uso más bien torpe de la inteligencia artificial– cunde la sensación de desorientación y desamparo y, con ella, la alarma y la indignación. (“Nadie os puede proteger, estamos viviendo tiempos peligrosos”, advirtió el decano de la Facultad de Periodismo de Columbia en una reunión para estudiantes extranjeros, después de instarles a que se cuidaran de no colgar nada en redes relacionado con Oriente Medio).

Esto no puede durar. Si el ejemplo de Columbia demuestra algo, es que más voluntad de obediencia solo invita a mayores abusos. En este sentido, la actitud pasiva de su rectora ante la detención de Mahmoud Khalil en una residencia de la universidad contrasta con la de la periodista Michel Martin, que, en una entrevista demoledora en la radio pública con el viceministro de Interior (Deputy Secretary of Homeland Security), solo necesitó cinco minutos para exponer la flagrante anticonstitucionalidad del caso. 🇺🇸

<https://ctxt.es/es/20250301>

ACLU y Democracy Forward demandan a la administración Trump por la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Democracy Forward y la ACLU del Distrito de Columbia demandaron hoy a la administración Trump por la invocación, prevista ilegal y sin precedentes, de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente.

La Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, es una autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente, tras una proclamación pública, detener, restringir y expulsar a ciudadanos de un país extranjero que participe en una “guerra declarada” o una “invasión o incursión depredadora” contra Estados Unidos.

La demanda alega que el presidente Trump pretende invocar ilegalmente esta centenaria ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para acelerar las deportaciones masivas, eludiendo los límites de esta autoridad en tiempos de guerra y los procedimientos y protecciones de la ley de inmigración.

El uso previo de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de guerra –por ejemplo, su invocación durante la Segunda Guerra Mundial para justificar el internamiento de personas de ascendencia japonesa– ha suscitado, con razón, constantes críticas. Emplearla como medio para evadir las leyes nacionales



Manifestantes protestaron frente a la Universidad de Columbia contra las sanciones impuestas a estudiantes y profesores proPalestina y por la detención de Mahmoud Khalil. F/ C. R.

en tiempos de paz es fundamentalmente erróneo.

“La intención del gobierno de Trump de utilizar una autoridad en tiempos de guerra para la aplicación de la ley migratoria es tan inédita como ilegal. Podría ser la medida más extrema del gobierno hasta la fecha, y eso es mucho decir”, declaró Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y asesor principal.

“Estados Unidos no está en guerra ni ha sido invadido. La invocación anticipada por el presidente de la autoridad en tiempos de guerra –que no es necesaria para llevar a cabo operaciones legales de control migratorio– es el último paso en una estrategia autoritaria que se acelera”, declaró Skye Perryman, presidente y director ejecutivo de Democracy Forward. Desde la detención indebida de ciudadanos estadou-

nidenses, pasando por la violación del derecho de las comunidades a celebrar su culto pacífico, hasta el intento indebido de invocar una ley responsable de algunas de las acciones más vergonzosas de nuestro país, la agenda migratoria de esta administración es tan ilegal como perjudicial.

“No existe ninguna acción militar extranjera que justifique la intención del presidente Trump de invocar esta ley, lo que convierte sus acciones no solo en ilegales, sino en un flagrante atentado contra los derechos fundamentales. Esta es otra peligrosa extralimitación del gobierno, diseñada para apoyar un programa de deportación masiva sin control, eludiendo al mismo tiempo la revisión judicial necesaria”, declaró Arthur Spitzer, asesor principal de la ACLU del Distrito de Columbia. 🇺🇸

Nota del 15 de marzo de 2025

***La Union Americana de Libertades Civiles, ACLU, es una organización que vela por los derechos y libertades de los ciudadanos estadounidenses, trabajando en las cortes, las legislaturas y las comunidades para defender y preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a todo el pueblo por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.**

Parecería evidente que la política de Donald Trump tiende a fortalecer a los Estados Unidos de América en el escenario internacional. Pero la realidad política del mundo nos muestra, por el contrario, los EU están viviendo una grave crisis en diversos órdenes de su estructura nacional e internacional. De ahí que el discurso trumpista [...]

T/ Adalberto Santana

Parecería evidente que la política de Donald Trump tiende a fortalecer a los Estados Unidos de América en el escenario internacional. Pero la realidad política del mundo nos muestra, por el contrario, los EU están viviendo una grave crisis en diversos órdenes de su estructura nacional e internacional. De ahí que el discurso trumpista de “hacer grande a América otra vez” busca impactar levantando los ánimos de los que votaron en la elección pasada por su candidatura. Especialmente en un país que vive una profunda decadencia como todo imperio cuando agota sus reales posibilidades de desarrollo económico, social y cultural.

Se afirma en análisis profundos sobre el fascismo, que ese fenómeno político únicamente se desarrolla en naciones que han arribado a un nivel de crisis

Trump, los migrantes y las drogas ilegales

económico social imperialista, la cual ha entrado en plena decadencia. Por ello requiere un discurso político profundamente ultranacionalista y racista, que en su lectura los enemigos a vencer son los migrantes. Actores sociales que en esa lectura son los portadores de sus males como las llamadas drogas ilícitas. Particularmente en esa narrativa, se reivindica un discurso que ubica a los migrantes indocumentados como sus principales enemigos, los que han deteriorado y lesionan profundamente la cultura y los hábitos nacionales anglosajones. En esa lectura figuran los migrantes sobre todo si proceden de países periféricos como los latinoamericanos (ya sean mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, colombianos, peruanos, bolivianos, dominicanos, venezolanos, etc.). Pero también aquellos que tienen un origen asiático o africano. Migrantes que viven en los EU son trabajadores internacionales indocumentados y étnicamente no anglosajones o esclavos. Para Donald Trump a ellos la califica con las siguientes palabras:

“¿Qué hay sobre permitir que entren personas a través de una frontera abierta, 13.000 de las cuales eran asesinos? Muchos de ellos asesinaron a mucho más de una persona”, afirmó Trump. “Y ahora viven felices en Estados Unidos. Ya saben, ahora un asesino... creo esto: está en sus genes. Y tenemos muchos genes malos en nuestro país ahora mismo. Entonces tuvieron 425.000 personas que entraron a nuestro país que no deberían estar aquí y que son criminales” (Los Angeles Times, 08/09/24).

Pensemos que en los EU desde principios del siglo XX al discurso antidrogas, se le asoció con los migrantes asiáticos por el crecimiento del consumo anglosajón del opio. Más tarde al consumo la marihuana se les asoció con los migrantes mexicanos. Para fines del siglo XX a los latinoamericanos se les relacionó con el crecimiento del consumo de cocaína. Hoy el discurso de Trump se centra en vincular a mexicanos y latinoamericanos, incluso a canadienses, con el tráfico del fentanilo.

Sin embargo, se puede reconocer que la narcopolítica si se ha expresado en nuestros países latinoamericanos. Los casos más claramente identificados son los de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública con el expresidente ultraconservador, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), personaje vinculado con el Cártel de Sinaloa. Más recientemente figura el caso del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado y posteriormente condenado por fomentar el tráfico de cocaína en 2024 en EU, a más de 45 años de prisión. Personajes de la

narcopolítica ultraconservadora que pusieron en evidencia sus nexos con la derecha latinoamericana y sus claros vínculos con la industria de las drogas ilegales y con la DEA. Un elemento que no menciona Donald Trump, es que en los EU y principalmente en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, cerca de Mar a Lago, donde tiene su residencia, es donde se realiza el mayor lavado de dinero procedente del tráfico ilícito de drogas. Ahí en los EU, las ganancias económicas que genera el narcotráfico, se estima según los estudiosos de la narcoeconomía, que se queda más del 90 por ciento de los recursos. Así, únicamente retornan a los países latinoamericanos entre un 10 y 5 por ciento de las enormes ganancias de la industria del narcotráfico. Pensemos que ese es el discurso decadente del imperialismo en crisis y del poder de Trump en los EU, que al asociar a los trabajadores internacionales indocumentados con las drogas es una gran perversión de la doble moral imperialista estadounidense. Por último, para quien desee profundizar en el tema, recomendamos a nuestros lectores mi libro: El narcotráfico en América Latina, México, Siglo XXI Editores. 🇺🇸

<https://www.telesurtv.net/blogs/>



Venezolanos fueron reclusos en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), en San Luis Talpa, El Salvador. F/ Cortesía



El procedimiento aplicado a los migrantes es totalmente ilegal y alejado de los procedimientos que se deben aplicar entre naciones. Los presos norteamericanos regresaron a su país en otras condiciones. F/ Cortesía

Escándalo por la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador

T/ Pablo Rodríguez

En un acto calificado como un “abierto desacato” a una orden judicial, el gobierno de Donald Trump deportó a más de 238 migrantes venezolanos a El Salvador, a pesar de que un juez federal había ordenado detener las expulsiones.

Venezuela expresó su rechazo categórico a la reciente proclama del gobierno de los Estados Unidos, calificándola como una medida anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal, dirigida a criminalizar a los migrantes venezolanos. El canciller Yván Gil, denunció que esta acción constituye un “acto infame e injusto”, evocando episodios oscuros de la historia de la humanidad, como la esclavitud.

“Denunciamos de forma energética que nuestros compatriotas en Estados Unidos están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos”, dice el comunicado, que reafirmó el compromiso de la gestión con la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el exterior y condenó cualquier política que atente contra la dignidad y el bienestar de los migrantes. Este pronunciamiento subraya la necesidad de promover un enfoque humanitario y respetuoso hacia la migración en el ámbito internacional.

Venezuela señaló que la administración de Donald Trump criminaliza a migrantes venezolanos al invocar una antigua ley para deportar a presuntos miembros de la banda del Tren de Aragua.

Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, señaló la Cancillería, que calificó de anacrónica la vieja ley invocada por Trump, y denunció: “no sólo violenta leyes fundamentales y vigentes de Estados Unidos, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos.

“En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores,



El pueblo responde en las calles a la violencia de las deportaciones. F/ Cortesía

dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales, ni ‘enemigos extranjeros’. Son víctimas”, añadió, al subrayar que su intento de aplicación constituye un delito de lesa humanidad y un precedente peligroso contra toda nuestra región.

Pese a la prohibición, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunciaron al unísono en redes sociales la decisión de Trump de deportar a decenas de presos venezolanos. Estados Unidos pagará a El Salvador seis millones de dólares por encarcelar durante un año a estos presos.

“El Salvador se ha comprometido a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo, lo cual también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”, afirmó Rubio, quien describió a los expulsados como “extranjeros enemigos”, antes de agradecer la contribución del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “el líder más fuerte en el tema de seguridad de nuestra región y un gran amigo”.

El término empleado por Rubio coincide con el usado por la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la ley que invocó Trump el pasado sábado y que concede al mandatario amplísimas competencias para expulsar gente del país. La norma, que a grandes rasgos se salta todo el proceso migratorio habitual, está diseñada para ser invocada si EEUU está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido EEUU o amenaza con hacerlo y capacita a la Administración a deportar inmediatamente a los detenidos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.

RUBIO Y BUKELE

Mientras, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en redes la llegada de 238 venezolanos, junto con otros 23 supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a través de un mensaje en redes sociales. “¡Uy!... demasiado tarde”, escribió Bukele, en referencia a la orden judicial que intentó frenar las deportaciones.

Los deportados fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40.000 personas, donde permanecerán “por un año”, según Bukele, aunque el plazo podría renovarse.

“Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13 y a 21 de sus más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió @POTUS, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”, aseguró por su parte el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Un video publicado por el mandatario salvadoreño muestra a los detenidos espositados y siendo escoltados entre golpes y amenazas por agentes armados hacia autobuses blindados, que los condujeron a la temida instalación.

El Cecot, parte de la estrategia de Bukele para combatir el crimen organizado, ha sido criticado por grupos de derechos humanos, quienes denuncian maltratos y la falta de garantías para los reclusos.

ACUERDO ENTRE EE. UU. Y EL SALVADOR

Según reportes de la agencia AP, El Salvador habría aceptado albergar a unos 300 migrantes durante un año a cambio de US\$ 6 millones. “EE.UU. pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros”, comentó Bukele en tono de humor negro.

Por su parte, el gobierno estadounidense no ha proporcionado pruebas que vinculen a los deportados con el Tren de Aragua (organización desarticulada en Venezuela) o con delitos cometidos en EE. UU. Las deportaciones forman parte de la campaña de Trump contra la inmigración ilegal, una de sus principales promesas de campaña.

Venezuela recibió hasta ahora cuatro vuelos con migrantes. Dos desde Estados Unidos, otro desde México y un cuarto desde Honduras, con migrantes desde la cárcel de Guantánamo, rescatados a través de una mediación del ex presidente hondureño Mel Zelaya y la actual presidenta, Xiomara Castro. Después de analizar caso por caso, el gobierno venezolano confirmó que ninguno de los repatriados estaba ligado al mentado Tren de Aragua.

El secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Jorge Arreaza rechazó la decisión de Trump, calificándola como un acto que evoca «los episodios más oscuros de la historia humana, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis».

Arreaza hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione y condene lo que describió como «acciones de secuestro y tortura». En un mensaje publicado en su canal de Telegram, el funcionario venezolano afirmó que El Salvador está siguiendo las órdenes de Washington, actuando como un gobierno “entreguista” que transgrede los derechos humanos de manera sistemática.

“El Salvador crea campos de concentración para los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades, siguiendo las órdenes de sus amos de Washington”, escribió Arreaza. Además, advirtió que “el castillo de naipes que ha creado Bukele, más temprano que tarde, se derrumbará”, en referencia a las políticas del presidente salvadoreño.

¿VENEZOLANOS O MEXICANOS?

Aunque Bukele aseguró inicialmente que los deportados encarcelados en su país eran presuntos miembros del Tren de Aragua, un video difundido por el mandatario ha generado dudas, ya que los detenidos, al ser interrogados, muestran un marcado acento mexicano, lo que ha puesto en entredicho su nacionalidad.

El video muestra la llegada de los migrantes a El Salvador, donde fueron recibidos con un fuerte despliegue de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el trato dado a los detenidos, denunciando violaciones a sus derechos fundamentales. ★

*Periodista venezolano de Question, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: <https://estrategia.la>